

JUICIO: “MARIA VERONICA SOSA DE CIBILS C/ INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL S/ AMPARO”: - Expte N°532/2026.-

S.D. N° 162

Asunción, 14 de abril de 2026

VISTO: Estos autos, de los que;-

RESULTA:

Que MARIA VERONICA SOSA DE CIBILS por derecho propio y bajo patrocinio de Abogado, ha promovido en fecha 10 de abril de 2026, a las 11:54 horas, la ACCION DE AMPARO CONSTITUCIONAL contra el INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL. Refiere que mediante la presente acción solicita respetuosamente que desde el INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL pueda gerenciar de manera urgente la adquisición de la VALVULA TAVI EDWARDS SAPIEN 3 N°23. y cualquier otro insumo necesario para el tratamiento de CARDIOPATIA ISQUEMICA, afección que padece la Sra. MARIA VERONICA SOSA DE CIBILS. Dicho insumo se encuentra sin existencia hasta la fecha, ya que el mismo es indispensable, considerando sumamente importante para que la doliente pueda ser tratada y en el mejor de los casos superar dicha afección que actualmente le está aquejando. Detalló las pruebas que hacen a su derecho y culmina con el petitorio de rigor. -

Por providencia de fecha 10 de abril de 2026, se tuvo por iniciada la acción y se requirió informe circunstanciado al INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL. Igualmente, como medida cautelar, se dispuso que el INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL, en un plazo no mayor de 48 horas, arbitre los medios necesarios para la URGENTE adquisición de la VALVULA TAVI EDWARDS SAPIEN 3 N°23, así como el acceso al servicio médico integral incluido todos los demás medicamentos necesarios para el tratamiento de y cualquier otro insumo necesario para el tratamiento de CARDIOPATIA ISQUEMICA.-

En fecha 13 de abril de 2026, a las 16:56 horas, se presentó el Abg. SOCRATES JONATHAN ELIESER FRETES VALDEZ, en representación del INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL, manifestando al juzgado cuanto sigue: ... “Inexistencia de acto ilegítimo exigido por el art. 134 de la Constitución Nacional La garantía del Amparo procede cuando se dan las circunstancias apuntadas en el art. 134 de la Constitución Nacional, que establece:...Toda persona que por un acto u omisión, manifiestamente ilegítimo, de una autoridad o de un particular, se considere lesionada gravemente, o en peligro inminente de serlo en derechos o garantías consagradas en esta Constitución o en la ley, y que debido a la urgencia del caso no pudiera remediarse por la vía ordinaria, puede promover amparo ante el magistrado competente...”De este modo, resulta claro que la procedencia del amparo depende de la concurrencia simultánea de estos elementos (acto u omisión manifiestamente ilegítima emanada de autoridad o particular, la violación de algún derecho constitucional y que exista urgencia, de manera tal que no pueda remediarse la situación por la vía ordinaria). Al respecto, el acto ilegítimo es aquel dictado por autoridad no competente para ello, o que no lo haya dictado conforme los procedimientos señalados, o cuyo contenido sea contrario al ordenamiento jurídico vigente, o bien, que lo



haya dictado sin fundamento o motivación suficiente. En el caso que nos ocupa, el IPS ha actuado en todo momento en base a las atribuciones que le confiere la ley para reglamentar la forma de concesión de las prestaciones que otorga a sus asegurados, conforme lo mandan su carta orgánica y los reglamentos que en su consecuencia se dicten. El amparista no desconoce las resoluciones reglamentarias del servicio al que pretende acceder y pretende utilizar la vía del amparo para que V.S. le provea un beneficio (internación y provisión de medicamentos) que no ha sido solicitado por el mismo ante los mecanismos institucionales establecidos para dicho efecto. Entonces, niego enfáticamente los argumentos esgrimidos en la demanda. Sobre todo niego el extremo de que el Instituto de Previsión Social haya obrado de manera legítima, **NO EXISTE DAÑO O VIOLACION A UNA GARANTIA CONSTITUCIONAL O ACTO ILEGAL POR PARTE DEL INSITUTO DE PREVISION SOCIAL.** Continúa diciendo; No es arbitraria ni ilegal la negativa del LP.S. de proveer los medicamentos que están con "stock cero" sobre todo cuando la administración está haciendo todo lo que legal y administrativamente está a su alcance, esto es ha iniciado los procedimientos de contratación establecidos en la ley 7021/22 para el suministro de los mismos a sus asegurados. La negativa se basa en normas de derecho público que generan responsabilidades civiles, penales y administrativas de sus funcionarios que vulneren tales normas. El dispositivo médico y los insumos solicitados se encuentran en proceso de compra: Se constata que el Instituto de Previsión Social está en pleno proceso de compra de tales insumos y dispositivos médicos, por lo que mal podría considerarse que se esté cometiendo acto ilegítimo alguno, lastimosamente, el IPS, como persona jurídica se ve sometido a las leyes y reglamentaciones para adquirir todo tipo de bienes y servicios, por lo que no es posible que el IPS vaya como cualquier otra persona a realizar la compra de lo requerido por el amparista, ya que debe primeramente formular un llamado de conformidad a las normas para las contrataciones públicas.

Así mismo comunica que..."La Institución actualmente está realizando un llamado a licitación pública nacional y, por la urgencia impostergable. Para un proceso de compras por excepción, basada en la urgencia impostergable se necesitan al menos 15 días. Este es el procedimiento más abreviado que permite la ley.-Es decir, que la Institución puede iniciar una Contratación por la Vía de la Excepción (CVE), por urgencia impostergable, previsto en el art. 40 de la Ley 7021/2022 "De Suministro y Contrataciones Públicas", que establece. Artículo 40.- Contratación por excepción. Las convocantes bajo su responsabilidad podrán llevar a cabo contrataciones sin sujetarse a los tipos de procedimientos convencionales y especiales establecidos en la presente Ley. en los supuestos que a continuación se señalan: Num. 2 Otras causales de excepciones que no afectan a la concurrencia: c) Existan razones justificadas para la adquisición o locación de bienes, o contratación de servicios u obras, por urgencias impostergables. A tal efecto, requiere de un plazo mínimo de al menos 30 (Treinta) días, tratándose de llamados sin objeciones de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y sin protestas de los interesados u oferentes..." -

Por providencia de fecha 13 de abril de 2026, el Juzgado tuvo por evacuado el informe requerido y llamó Autos para Sentencia.-

CONSIDERANDO:



La Sra. MARIA VERONICA SOSA DE CIBILS, promueve juicio de amparo contra el INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL basándose, en el carácter de urgencia con la que necesita la provisión de la VALVULA TAVI EDWARDS SAPIEN 3 N°23 para el tratamiento de la cardiopatía isquémica que le afecta.-

La accionada, el INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL, por medio de su representante convencional manifiesta al juzgado que actualmente la previsional no tiene en stock, el insumo requerido por la amparista. Así mismo, expresa que, "La Institución actualmente está realizando un llamado a licitación pública nacional. Para un proceso de compras por excepción, basada en la urgencia impostergable se necesitan al menos 15 días. Este es el procedimiento más abreviado que permite la ley. Es decir, que la Institución puede iniciar una Contratación por la Vía de la Excepción (CVE), por urgencia impostergable, previsto en el art. 40 de la Ley 7021/2022 "De Suministro y Contrataciones Públicas", que establece. Artículo 40.- Contratación por excepción. Las convocantes bajo su responsabilidad podrán llevar a cabo contrataciones sin sujetarse a los tipos de procedimientos convencionales y especiales establecidos en la presente Ley. en los supuestos que a continuación se señalan: Num. 2 Otras causales de excepciones que no afectan a la concurrencia: c) Existan razones justificadas para la adquisición o locación de bienes, o contratación de servicios u obras, por urgencias impostergables. A tal efecto, requiere de un plazo mínimo de al menos 30 (Treinta) días, tratándose de llamados sin objeciones de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y sin protestas de los interesados u oferentes.-"... -

La doctrina conceptualiza al amparo constitucional como: "(...) Un medio destinado a proteger derechos y garantías establecidos por el orden constitucional nacional e internacional. Pero esta jurisdicción protectora opera sobre la base de la existencia de ciertos presupuestos o particularidades que ha de presentar el conflicto que configuran lo que se ha dado en llamar situación de amparo" (Rivas, Adolfo – El Amparo – Ediciones La Roca – Buenos Aires, Argentina – Año 2003) y que habilitan la vía prevista por la Constitución Nacional. El Maestro Bidart Campos decía que "la demanda de amparo es la pretensión formal que se interpone contra el Estado para que por sus órganos jurisdiccionales depare tutela a una pretensión material mediante vía sumaria y expeditiva y ello es en razón de que "la vía procesal ordinaria frustraría el derecho a la jurisdicción, resolvería el caso fuera de sus circunstancias, en forma inidónea e ineficaz" (Bidart Campos, Germán – Derecho de Amparo – Ediar Editores – Buenos Aires, Argentina – Año 1961).- En este orden, el amparo exige que la actuación u omisión de la autoridad pública (o del particular), lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías constitucionales, en forma actual o inminente. -

Así las cosas, tenemos que para la procedencia del juicio de amparo se debe supeditar al cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 134 de la Constitución y que copiado textualmente dice: "Toda persona que por un acto u omisión, manifiestamente ilegítimo, de una autoridad o de un particular, se considere lesionada gravemente, o en peligro inminente de serlo en derechos o garantías consagrados en esta Constitución o en la ley, y que debido a la urgencia del caso no pudiera remediarse por la vía ordinaria, podrá promover amparo ante el magistrado competente. El procedimiento será breve, sumario, gratuito, y de acción popular para los casos previstos en la ley. El magistrado tendrá facultad para salvaguardar el derecho



o garantía, o para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida. Si se tratara de una cuestión electoral, o relativa a organizaciones políticas, será competente la justicia electoral. El amparo no podrá promoverse en la tramitación de causas judiciales, ni contra actos de órganos judiciales, ni en el proceso de formación, sanción y promulgación de las leyes. La ley reglamentará el respectivo procedimiento. Las sentencias recaídas en el amparo no causarán estado...”.-

De ello se desprende los siguientes requisitos: a) Acto u omisión de autoridad -o de particular, manifiestamente ilegítimo que lesione o ponga en peligro inminente derechos o garantías consagrados en la Constitución o en la ley. Esta arbitrariedad debe tratarse de algo descubierto, patente, claro, notorio, inequívoco, indudable, cierto, ostensible, palmario, etc., que implique que lo manifiesto signifique un juicio que corresponde a todos sin distinción ni dudas. B) Urgencia del caso y c) Inexistencia de otras vías legales para la solución y d) el plazo previsto en la ley para su interposición. Estos requisitos son los que el promotor del amparo debe justificar en su escrito inicial y probar en la etapa procesal pertinente, de la misma manera, existen requisitos o condiciones procedimentales, expuestos en los Arts. 565, 566 y 567 del C.P.C. consistentes básicamente en el plazo de promoción, casos en los cuales no procede y reglas de competencia.-

Ahora bien examinadas las constancias de autos, observamos que no cabe duda alguna sobre dos puntos relevantes para la resolución del presente conflicto los cuales son: la Sra. MARIA VERONICA SOSA DE CIBILS, es paciente del INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL, y que, en consecuencia, posee legitimación activa para intervenir en el presente juicio y en segundo lugar que la misma padece de CARDIOPATIA ISQUEMICA, quien necesita con suma urgencia la provisión de la válvula requerida y que la misma se encuentra realizando un tratamiento médico que le ayuda a combatir o paliar dicha enfermedad.-

En cuanto al primer requisito, ilustra el celeberrimo Bidart Campos, al sostener que “(...) Siempre que aparezca, en consecuencia, de modo claro y manifiesto, la ilegitimidad de una restricción cualquiera a algunos de los derechos esenciales de las personas, así como el daño grave e irreparable que le causaría remitiendo el examen de la cuestión a los procedimientos ordinarios, administrativos o judiciales, corresponderá que los jueces restablezcan de inmediato el derecho restringido por la rápida vía del recurso de amparo” (Bidart Campos, Germán – Régimen Legal y Jurisprudencial del Amparo – Editorial Ediar – Buenos Aires, Argentina, - Año 1969). -

Resulta obvio que el primer derecho que tenemos los seres humanos es a la vida. Sin ella, todo otro derecho carece de sentido. Así la Carta Magna de la República manifiesta claramente en sus artículos Art. 4 y 68, que: el primero de ellos dispone “El derecho a la vida es inherente a la persona humana, se garantiza su protección, en general, desde su concepción...” y que en el mismo sentido dispone el Art. 6, apartado 1 del Pacto de San José de Costa Rica. Por su parte el segundo articulado dice: “El Estado protegerá y promoverá la salud como derecho fundamental de la persona y en interés de la comunidad. Nadie será privado de asistencia pública para prevenir o tratar enfermedades, pestes o plagas, de socorro en los casos de catástrofe y de accidentes...”.- En concordancia con la jurisprudencia y



doctrina al respecto, sostenemos que el derecho a la vida constituye un presupuesto axiológico condicionante para el goce de los demás derechos y libertades consagrados en nuestro sistema.-

Es así que el presente caso nos lleva a aplicar necesariamente la protección de los derechos consagrados en la Constitución, para el pleno goce y ejercicio de ellos, aplicando derechos constituidos legalmente en nuestra ley positiva suprema la “Constitución Nacional”.- EL Prof. Dr. Ramírez Candia dice que: “La ilegitimidad es una expresión indeterminada, situación que ha generado interpretaciones diferentes en los precedentes judiciales. Así, surgen en la práctica judicial dos criterios de ilegitimidad del acto que son los siguientes: 1) ilegitimidad como acto contrario a la legalidad, 2) ilegitimidad como acto de afectación de derechos constitucionales” (Ramírez Candia, Manuel Dejesús – Amparo – Editorial Arandura – Asunción, Paraguay – Año 2015).-

La Sra. MARIA VERONICA SOSA DE CIBILS, fue diagnosticada con CARDIOPATIA ISQUEMICA, por lo que necesita seguir con el tratamiento y la provisión de la VALVULA TAVI EDWARDS SAPIEN 3 N°23.- Ante esta urgencia de recibir dicha válvula, la amparista promueve la presente acción solicitando que el INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL le provea de la VALVULA TAVI EDWARDS SAPIEN 3 N°23, la cual alega no tener en stock puesto que se encuentran en proceso de licitación para la adquisición del mismo.- Con esta acción, sin sombra de dudas, inferimos que se conculcan las disposiciones de la Carta Magna sobre la salud de las personas y el derecho a la vida".-

Por todo esto, consideramos prudente expresar que se torna cumplido el primer requisito.-

Para el segundo presupuesto de la acción que nos ocupa, y que es la urgencia del caso; según se desprende el informe elevado por el Dr. JUAN ELÍAS ROLÓN PAREDES, Cardiólogo. con Reg.Prof. N° 5568, adjuntado en autos, se vislumbra la gravedad de la enfermedad, así como el mejoramiento logrado mediante el tratamiento, lo que implica la imperiosa necesidad y urgencia de que el mismo sea continuado y mantenido conforme a las prescripciones médicas. -

Para el tercer requisito, podemos referir que cuando se lesionan por acción u omisión los derechos difusos de nuestra norma constitucional, surge que el amparo es un resorte legal que permite la actividad de nuestro Poder Judicial para la inmediata y efectiva tutela de estos derechos esenciales de la Carta Magna, tratados y leyes. Cuestión esta que fuera sostenida por la máxima instancia judicial y desarrollada por el Prof. Dr. Paciello Candia que dijo: “(...) ha de tenerse presente la naturaleza de la acción de amparo acertadamente calificada como un remedio excepcional al que solamente puede acudir en ausencia de otros que concurran en defensa del derecho o garantía constitucional pretensamente afectados. Es la vía excogitada por el constituyente para tornar operante el no menos valioso precepto constitucional de que los derechos fundamentales consagrados en la primera parte de la Constitución no pueden resultar preteridos o nulificados por obra de formalismos que terminan constituyendo una denegación de justicia, ya que esta al no ser expedita corre el riesgo de transformarse en fuente de injusticias. - Ha de tenerse presente, sin embargo, que entre esos derechos fundamentales consagrados por la Constitución está uno de singular relevancia para



la vigencia de los derechos, cual es el de la defensa en juicio, gravemente afectado cuando por una insuficiente consideración de los hechos o del derecho embebido en los mismos, resulta cercenado en aras de urgencias no bien definidas o consideradas. Es por eso que las leyes procesales estatuyen la vía del juicio ordinario, del proceso común, como el único marco compatible con las plenas garantías del debido proceso legal. Apartarse de este marco, como ocurre con la acción de amparo, solamente puede darse por razones de excepción, y es el motivo por el que el propio texto constitucional se ocupa de establecer con mucha claridad sus presupuestos procesales. -" (A.S. N° 373 – Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República del Paraguay – 22/11/1995).-

Las vías previas son los procedimientos a efectuarse tanto en el ámbito administrativo estatal, como dentro del ordenamiento administrativo no estatal, o sea, en el ámbito de la actividad privada. Las vías paralelas o concurrentes son todos los medios de defensa de que dispone el agraviado por el acto lesivo, al margen del amparo, para articular ante autoridad competente su pretensión jurídica. La vía paralela debe existir, pero además debe ser idónea para la solución inmediata del conflicto. Litigar en fueros ordinarios, ya sea administrativos o civiles, demandarían tiempos que ya tornarían inocuas las resoluciones, más tratándose de casos como el presente, en que nos encontramos ante una enfermedad que pone en riesgo la vida de una persona, y para la cual, cualquier dilación podría ser determinante en el desenlace de la misma. Por ello, consideramos que el amparo es la vía pertinente para resolver la cuestión que nos ocupa. -

A lo expuesto debemos agregar que consta en autos el informe de Estudios Hemodinámico en el que da cuenta que: "La paciente con diagnóstico de estenosis aórtica severa, más enfermedad de múltiples vasos se realizó angiotomografía protocolo TAVI, fué analizado y evaluado fuera de la institución y el informe técnico arrojó y califica a una valvula TAVI balón expendible de la marca EDWARDS SAPIENS 3 n°23. Asimismo la nota interna dirigida a la Asesoría Legal, de parte de Julia Guerrero, Coordinadora Sección Admisión Hospitalaria TN 3, en la que expresa: "En relación al Amparo referente a la Sra. MARIA VERONICA SOSA DE CIBILS con C.I N° 644.010 informa cuanto sigue: Se toma conocimiento del Amparo y se dará cumplimiento una vez se presente para la internación".

En estas condiciones, consideramos que corresponde hacer lugar al amparo promovido y en consecuencia, confirmar la medida cautelar decretada en autos por providencia de fecha 10 de abril de 2026, y disponer que el INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL, arbitre los medios necesarios para que la paciente MARIA VERONICA SOSA DE CIBILS, con C.I. N° 644.010, reciba sin demora la VALVULA TAVI EDWARDS SAPIEN 3 N°23, necesario para el tratamiento de CARDIOPATIA ISQUEMICA, así como el acceso al servicio médico integral incluido todos los medicamentos necesarios, en la forma indicada por prescripción médica, conforme a sus necesidades, debiendo el Instituto de Previsión Social, prever las gestiones administrativas y financieras pertinentes para cubrir tal cuestión.-

En cuanto al pedido formulado por el representante del Instituto de Previsión Social, de integrar este juicio con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, corresponde rechazar dicho pedido, ya que, tratándose de una paciente del Instituto de Previsión Social, el principal



obligado a brindar dicha cobertura es, en primer lugar, la entidad aseguradora, el Instituto de Previsión Social. A ello se suma que, el Instituto de Previsión Social posee autonomía, se rige por sus propios reglamentos y estatutos. La presente acción se encuentra correctamente dirigida en contra del Instituto de Previsión Social, por derivar la fuente de la obligación de un vínculo preexistente entre las partes. El Ministerio de Salud Pública no puede adquirir medicamentos o insumos médicos no disponibles en su listado de tecnologías sanitarias a favor de pacientes que no siguen tratamiento en su red asistencial, sin antes proceder a la evaluación por el servicio de salud competente y dependiente de esta Cartera del Estado. En cuanto a la disposición normativa del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, referida al caso concreto, la ley Nro. 5099/13, en su artículo 4° refiere: "El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social planificará e implementará una distribución equitativa de los recursos asignados anualmente por la ley del presupuesto general de la nación para el fortalecimiento progresivo de su red asistencial, el aumento de la cobertura y de la calidad de sus servicios". En este sentido, tanto el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, como los demás ministerios se deben manejar con los fondos que le proporciona el Estado para su administración. Es por ello que existe un vademécum de medicamentos e insumos varios preestablecidos para su adquisición por el previo procedimiento licitatorio legalmente obligatorio. En este sentido, y tal como lo hemos expuesto, si el paciente no se encuentra en tratamiento en alguna de sus instituciones dependientes, mal podría el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social adquirir medicamentos, sin contar con la prescripción de médicos vinculados a dicha cartera de Estado y bajo la supervisión de sus órganos de control, más cuando, como en este caso, el accionante es asegurado del Instituto de Previsión Social.

Finalmente, las costas deberán ser impuestas por su orden según manda el Art. 193 del C.P.C.; debido a que en relación a lo estudiado en el juicio que nos ocupa, existen divergencias doctrinales y jurisprudenciales al respecto, y que las partes han ejercido la defensa de sus pretensiones y derechos con la buena fe que debe campear en las relaciones procesales. -

Por tanto, con base a lo esbozado precedentemente y a las disposiciones constitucionales y normativas vigentes, el **JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL VIGÉSIMO SEGUNDO TURNO DE LA CAPITAL SECRETARÍA N° 43**; -

RESUELVE:

HACER LUGAR a la acción de amparo constitucional promovida por la Sra. **MARIA VERONICA SOSA DE CIBILS**, conforme al exordio de esta resolución y en consecuencia; **DISPONER** que el **INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL**, arbitre los medios necesarios para que la Sra. **MARIA VERONICA SOSA DE CIBILS**, con C.I. N° 644.010, reciba con urgencia la VALVULA TAVI EDWARDS SAPIEN 3 N°23, necesaria para el tratamiento de **CARDIOPATIA ISQUEMICA**, así como el acceso al servicio médico integral incluido todos los medicamentos necesarios, en la forma y con la frecuencia indicada por prescripción médica, conforme a sus necesidades.-

RECHAZAR el pedido de integración del presente amparo con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social conforme a los fundamentos expuestos en el exordio de esta resolución.



CONFIRMAR la medida cautelar decretada en autos.-

IMPONER las costas en el orden causado. -

NOTIFICAR por cédula en formato electrónico. -

ANOTAR, registrar y remitir copia a la Excelentísima Corte Suprema de Justicia. -

CONSTANCIA: ESTA RESOLUCIÓN FUE REGISTRADA DIGITALMENTE EN LA DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA JUDICIAL.

*Para conocer la
validez del
documento,
verifique aquí.*

